

## EL DAÑO AL PROYECTO DE VIDA: UNA CATEGORÍA AUTÓNOMA Y NECESARIA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CIDH

Olenka Woolcott Oyague\*

*“La protección de los victimados, y las reparaciones por los daños por ellos sufridos, constituyen su raison d’être. Este notable desarrollo [...] acarreó una verdadera transformación del propio orden jurídico internacional” (Corte IDH, 2004e, párr. 19).*

*“[...] de hecho somos una libertad que elige, pero no elegimos ser libres; nosotros estamos condenados a la libertad” (Sartre, 1949, p. 79).*

### Introducción

La ampliación de las categorías de daño —en particular, la noción del daño al proyecto de vida— conforme a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (entiéndase para efectos de este capítulo que al referirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se utiliza la sigla CIDH o la expresión la Corte) ha denominado “otras medidas de reparación”, es uno de los aportes más

---

\* Abogada, doctora en Derecho. Docente e investigadora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cisjuc), Facultad de Derecho Universidad Católica de Colombia. Este capítulo forma parte del resultado de investigación del grupo de estudio en Derecho Privado y Propiedad Intelectual, en la línea de Constitucionalización y actualización del Derecho Privado Nacional, estudio comparado. El proyecto se titula “Los retos del Derecho Privado contemporáneo en el contexto del debate constitucional y los nuevos desarrollos de la economía”.

significativos de la labor de interpretación que ha venido realizando el tribunal internacional en las últimas décadas, en el trascendente proceso de construcción de criterios para la protección de la víctima y la reparación del daño, inspirado en el carácter progresivo que define el contenido de los derechos humanos<sup>32</sup>.

América Latina ha sido escenario de crueles y sangrientos episodios de violaciones masivas de derechos humanos, frente a los cuales los países han asumido el compromiso internacional de hacer frente a las consecuencias nefastas, perseguir el delito y reparar a las víctimas, con la esperanza de que no se repitan esos hechos y se pueda construir una cultura de paz entre todos los ciudadanos.

Por un lado, la jurisprudencia de la CIDH ha generado lineamientos que han sido o son incorporados por los ordenamientos jurídicos y, por otro, se observa que la construcción doctrinaria o jurisprudencial de los ordenamientos internos puede hacer un aporte significativo a la protección de las víctimas y la reparación del daño por la violación de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el daño al proyecto de vida se destaca en el escenario de la jurisprudencia de la CIDH como una figura de daño tan compleja cuanto indispensable para la reivindicación de la protección de las víctimas, fuera de los casos del daño material y daño moral, que no tienen mayor complejidad por su entendimiento y aplicación analógica del Derecho Civil.

Se ha atribuido al recurso de la analogía con las soluciones del Derecho Civil de los sistemas jurídicos nacionales, el que exista un “cierto grado de imprecisión” en las medidas de reparación en el derecho internacional (Corte IDH, 1997a). La reparación integral del daño sufrido por la víctima constituye el objetivo primordial de la institución de la responsabilidad civil y es en el Derecho Civil en donde dicha institución ha experimentado una evolución que traslada el centro de su atención del agente causante del daño a la víctima. También cabe reconocer que el tratamiento de la reparación de daños que se realiza en el plano del Derecho interno puede alcanzar una dimensión internacional, como lo representan los aportes sobre el daño al proyecto de vida.

En el plano internacional, la jurisprudencia en este asunto no solo debe tener en cuenta los logros alcanzados en el Derecho Civil para la identificación de

32 En el sentido de destacar el carácter progresivo que utiliza la CIDH, no solo para mejorar el estándar de protección de un derecho, sino también en la construcción de nuevos mecanismos jurídicos para el amparo de las víctimas (Galdámez, 2007, p. 439).

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria•

los conceptos de daños reparables y las medidas adoptadas para su reparación, sino además, “el enfoque y el aporte propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Esto último ha sido subrayado en el voto razonado de A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli (Corte IDH, 1997a), en el cual se puso de relieve el reconocimiento al daño al proyecto de vida de la víctima, “como un primer paso en esa dirección y propósito” y cuestionó que si no hubiera una determinación de la ocurrencia de dicho daño, entonces:

[...] cómo se lograría la *restitutio in integrum* como forma de reparación, cómo se procedería a la rehabilitación de la víctima como forma de reparación, cómo se afirmaría de modo convincente la garantía de no-repetición de los hechos lesivos en el marco de las reparaciones (Corte IDH, 1997a, párr. 12).

El escrito intenta mostrar que, en el marco de la evolución del concepto de reparación de los daños que ha observado la jurisprudencia de la CIDH, surge el daño al proyecto de vida como una prueba de la necesidad de ampliar las categorías de daño tradicionalmente contempladas por la Corte, más allá del daño y del moral, para atender las exigencias que presentan los casos concretos de violación de derechos humanos a la luz del principio de reparación integral del daño.

La tendencia en los avances jurisprudenciales del Derecho interno consiste en que el desarrollo de los conceptos se produce a partir de la asimilación de los estándares internacionales de protección (López-Cárdenas, 2009), aunque la influencia también puede surgir en sentido inverso. Esto quiere decir que el desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el Derecho interno puede tener un impacto significativo y trascender a las instancias internacionales para contribuir al desarrollo de la protección de los derechos humanos.

El daño al proyecto de vida es un caso paradigmático del impacto que pueden ejercer los ordenamientos internos latinoamericanos en el reforzamiento de la protección de las víctimas de violación de derechos humanos<sup>33</sup>. Dicho impacto es un elemento de reflexión para los sistemas jurídicos internos, en el sentido de tomar conciencia sobre el rol que tienen en el proceso general de protección

33 En sentido inverso, es decir, de una influencia que puede ejercer la CIDH en el Derecho interno, se ha señalado que entre los muchos aportes de dicha jurisprudencia existen algunos asuntos que han sido menos abordados por la doctrina y la jurisprudencia comparada, como el de la ampliación de las categorías de daño a la noción del daño al proyecto de vida, respecto a los cuales es posible prever que en el futuro algunos de ellos también tengan cabida o sea debatido en el ámbito del derecho interno (Galdámez, 2007, pp. 447-448).

de los derechos humanos mediante las construcciones jurídicas o los valores que se pueden implementar en el propio Derecho interno.

En esta línea de acción, una construcción dogmática y jurisprudencial como la figura del daño al proyecto de vida revela una especial sensibilidad de los juristas y los operadores del Derecho frente a las graves implicaciones en el proyecto de vida de un ser humano que pueden tener los actos que vulneran los derechos personalísimos.

En lo que va de la producción jurisprudencial en los casos de responsabilidad por la violación de derechos humanos, la jurisdicción de la CIDH ha observado un énfasis particular en la situación de las víctimas, al articular mecanismos o criterios que no podrán restituir las cosas al estado anterior de la agresión; sin embargo, intentan ofrecer un marco jurídico adecuado para la reparación del daño, que es a lo que debe hacerse frente una vez que el hecho dañoso se ha producido.

Dicha orientación jurisprudencial se alinea a la doctrina contemporánea sobre derechos humanos, que ha establecido una relación entre el derecho a la reparación, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia<sup>34</sup>, como destaca el voto razonado conjunto de Cançado Trindade y A. Abreu Burelli (Corte IDH, 1997a). Sin un proceso que aclare los hechos violatorios de derechos humanos, que permita identificar a los responsables e individualizar los daños padecidos por las víctimas en consideración de toda la dimensión de la persona humana, no sería posible alcanzar la reparación del daño como una *restitutio in integrum*, pues no se tendría una base cierta que permitiera determinar el tipo y la magnitud de daño que se ha producido.

### La perspectiva de la CIDH centrada en la víctima

La jurisprudencia de la CIDH revela que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha contribuido a reivindicar el rol central de la víctima como “sujeto activo de la acción internacional para la implementación de la responsabilidad del Estado por la lesión de sus derechos” (Corte IDH, 2004e, párr. 19). En este sentido se ha expresado el juez A. Cançado Trindade en un voto razonado, en donde

.....  
 34 La realización de estos derechos se ve obstaculizada con las medidas de Derecho interno que conducen a una situación de impunidad. Es el caso de las llamadas autoamnistías referidas a violaciones de derechos humanos (Joinet, 1997; Hadji Guissé, 1997).

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria.

destaca que “la protección de los victimados y las reparaciones por los daños por ellos sufridos, constituyen su *raison d’être*” y que dicho desarrollo “acarreo una verdadera transformación del propio orden jurídico internacional” (Corte IDH, 2004e, párr. 19).

El DIDH tiene su razón de ser en la protección de la víctima, entendida como la persona cuyos derechos han sido violados<sup>35</sup>. Ese reconocimiento comporta una adecuación de sus planteamientos a las circunstancias de los casos concretos, con el fin de ofrecer respuestas a los problemas de violación de los derechos humanos a partir de un enfoque que ubique a la víctima en el centro de su atención para determinar la responsabilidad del Estado y apunte a la plena reparación de la víctima (Rousset, 2001). Esto difiere de la perspectiva sancionadora del Derecho Penal, sea en el plano nacional como internacional, la cual surge de un modelo centrado en el delincuente y no en la víctima directa del delito.

En este contexto, la reparación de los daños es para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el objetivo fundamental que persigue todo proceso contencioso<sup>36</sup>. De allí que se afirme que “las reparaciones constituyen el horizonte natural de las expectativas individuales y sociales en los casos contenciosos” (García, 2002, p. 147). La obligación de reparar el daño tiene la misma importancia que la correspondiente al respeto y a la garantía de los derechos fundamentales por parte del Estado.

En el plano del Derecho interno, esa misma perspectiva de atención central en la víctima del daño también se encuentra presente en la institución de la responsabilidad civil. Esto se ha hecho evidente en virtud de los aportes doctrinarios y jurisprudenciales referidos a la evolución de sus fundamentos a lo largo del

35 La víctima de una violación de derechos humanos es aquella que ha sufrido un daño (Henao, 1998). Por su parte, el Reglamento de la CIDH en su Artículo 2 de las Disposiciones Preliminares, punto 31, define a la víctima como “la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte”. La jurisprudencia de la CIDH ha experimentado una evolución en la noción de víctima, en el sentido de entender por víctima no solo a aquella sobre la cual recaía directamente el acto ilícito (lo que sucedió entre 1989 y 1998), sino también a los familiares, considerados víctimas consecuenciales o indirectas del ilícito (Mejía, 2003). La Corte inició el cambio jurisprudencial extendiendo los alcances del concepto de víctima a los familiares de la misma a partir del caso Castillo Páez vs. Perú (Corte IDH, 1997). Más adelante, se puede apreciar la opinión del juez Cançado Trindade en su voto razonado concurrente recaído en el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (Corte IDH, 2002a).

36 En el sentido de afirmar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha ido más allá de un simple concepto de reparación y ha hecho alusión a las reparaciones integrales (Acosta y Bravo, 2008).

siglo XX, lo que ha permitido reivindicar el rol de la víctima en cada uno de los supuestos de responsabilidad<sup>37</sup>.

En el caso *Tibi vs. Ecuador*, el juez Cançado Trindade destacó en su voto razonado, la “posición central de los victimados en el orden jurídico” y afirmó que la víctima trasciende a la figura de “sujeto pasivo del delito”, ya que “asume el rol de auténtico sujeto activo de la acción judicial internacional en defensa de los derechos que le son inherentes como ser humano” (Corte IDH, 2004e). En esta línea, subrayó el aporte del DIDH en la restauración del papel central de la víctima, a diferencia del rol que ha desempeñado tradicionalmente en el ámbito del Derecho Penal, orientado más bien hacia la figura del delincuente. Destaca que de ese papel central de la víctima se deriva que esta sea considerada “sujeto activo de la acción internacional para la implementación de la responsabilidad del Estado por la lesión de sus derechos”.

Asimismo, el rol que han asumido las víctimas y sus representantes en los procesos ante la CIDH se ha visto reflejado en las reformas que ha experimentado el Reglamento de la Corte, pues les posibilita la presentación autónoma de sus escritos, solicitudes, fundamentos y pruebas en cualquier momento del proceso, de conformidad con lo dispuesto por su Artículo 25.1.

### **La interpretación evolutiva de la CIDH y el carácter progresivo de los derechos humanos: elementos para una adecuada implementación del principio de reparación integral del daño**

Como se ha señalado, el DIDH centra su mirada en la protección de la víctima. En esa línea, el principio de la reparación integral de los daños encuentra un espacio fecundo para su constante y progresiva realización. La jurisprudencia de la CIDH desarrolla esta perspectiva gracias a una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales y al carácter progresivo de los derechos humanos, puesto que apuntar a mejorar la protección de los derechos.

Ese enfoque dinámico y renovador en la solución de los casos de violación de derechos humanos se refleja en el rol protagónico que se reconoce a las víctimas

.....  
37 La posición central de la víctima va unida a la observancia del principio de reparación integral del daño. Sobre este tema, puede verse en la doctrina italiana Visintini (1999), Scognamiglio (1968), Franzoni (2004) y en la doctrina francesa, Mazeaud-Tunc (1960) y Viney (2001).

de violaciones de derechos humanos en el orden jurídico, como se explica en el apartado precedente, así como en la amplitud de los criterios de la Corte para la aplicación de los conceptos que se refieren a la víctima y a la reparación de daños. Estos se inspiran a su vez, en el principio de la dignidad de la persona humana como fin primordial del Derecho, entre los que resalta, la noción daño al proyecto de vida, que es el objeto central del presente estudio.

La Corte ha afirmado que “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección” (Corte IDH, 2004c, párr. 165). Tal interpretación se consagra en las reglas generales de interpretación de la Convención de Viena de 1969 y destacó que tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea han afirmado que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”<sup>38</sup> (Corte IDH, 2004c, párr. 165).

En el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú* cuyos hechos consistieron en la detención arbitraria seguida de tortura y posterior ejecución extrajudicial de dos menores de edad, la Corte partió de la consideración de que la detención ilegal de una persona la pone en una situación agravada de vulnerabilidad y en riesgo de que se afecten otros derechos. Este razonamiento le permitió presumir —y en ello se evidencia la interpretación evolutiva— que la víctima de una detención ilegal, además, fue violentada en su derecho a la integridad. Respecto a este punto, la Corte recuerda lo señalado por la Corte Europea acerca de que el análisis de la gravedad de los actos constitutivos de la violación del derecho a la integridad es relativo, pues depende de las circunstancias del caso (duración, efectos físicos y mentales, sexo, edad y estado de salud de las víctimas). Los hechos que acontecieron en el caso condujeron a la Corte a calificarlos como actos de tortura (Corte IDH, 2004c).

Otra expresión del carácter evolutivo y progresivo de la jurisprudencia de la CIDH se halla en la extensión del concepto de víctima, pues asume como tal no solo a la persona que sufre directamente los efectos de la violación de derechos humanos, sino también a los familiares como víctimas indirectas. Dicha

38 En el caso *Tibi vs. Ecuador*, la Corte consideró que la “interpretación evolutiva” de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos constituye una “orientación fundamental” para fortalecer el avance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Corte IDH, 2004a, párr. 144).

extensión conceptual ha sido entendida como una aplicación amplia de la regla *pro homine* (Corte IDH, 2000)<sup>39</sup>.

### El principio de reparación integral del daño en la jurisprudencia de la CIDH

En el campo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se puede apreciar en el voto razonado de A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli un llamado de atención para tener siempre presente un principio básico del Derecho Internacional en materia de reparaciones, que consiste en que los Estados tienen la obligación de hacer cesar aquellas violaciones y remover sus consecuencias (Corte IDH, 1997a). Se destaca el mencionado principio ante el reconocimiento de que las consecuencias jurídicas de las violaciones de las obligaciones convencionales de protección no han sido suficientemente examinadas o desarrolladas en la doctrina. De allí que el principio de la *restitutio in integrum* adquiera un relieve especial frente a la insuficiencia de las indemnizaciones y más bien puede constituir la piedra angular del sistema de reparaciones que se articule y canalice mediante la jurisprudencia de la CIDH.

Asimismo, la CIDH ha afirmado que “la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que ha incurrido (*restitutio in integrum*, indemnización, satisfacción, garantía de no repetición, entre otras)” (Corte IDH, 1998b, párr. 48).

Los pasos que se han dado en el DIDH en cuanto a reparación del daño a las víctimas ratifican que el fin primordial de un sistema de protección internacional de derechos humanos no consiste en declarar la responsabilidad internacional de un Estado, sino en la plena reparación del daño a la víctima (Rousset, 2001). Al respecto, se ha afirmado con razón que “las reparaciones constituyen el horizonte natural de las expectativas individuales y sociales en los casos contenciosos” (García, 2002, p. 147).

.....  
39 El concepto extensivo de víctima desarrollado por la Corte no ha sido acogido por todos los ordenamientos internos. En Colombia, el Consejo de Estado (2000) niega la existencia de víctimas indirectas como personas afectadas por derecho propio y establece que para que prospere una acción de grupo, es requisito que los afectados sean víctimas directas (López-Cárdenas, 2009).



•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria.

### *Alcances de la reparación integral*

La base legal sobre reparaciones por violación de los derechos humanos se encuentra en el Artículo 63.1 de la Convención Americana que a la letra dispone:

Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (Organización de los Estados Americanos, 1969).

Al respecto, la Corte ha destacado que el precepto en mención configura la consagración de una norma consuetudinaria y uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado (Corte IDH, 2001a)<sup>40</sup>. En efecto, el principio del derecho a la reparación se acoge por primera vez en 1928, a propósito de un caso de expropiación de una fábrica en la ciudad de Chorzów (Polonia), en el cual la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) señaló que “es un principio de derecho internacional, e incluso un concepto general del derecho, que cualquier incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una reparación” (Corte Permanente de Justicia Internacional, 1927, párr. 21). El precepto fue reafirmado luego por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)<sup>41</sup>. La CIDH ha acogido este principio en su propia jurisprudencia.

Del texto de la norma de la Convención Americana se desprenden dos grandes aspectos que configuran los alcances de la reparación. El primero tiene como objetivo borrar las huellas del ilícito ejecutado por el Estado y el segundo, evitar que los hechos se repitan.

Debido a esos alcances de la reparación, la CIDH ha considerado que la misma involucra toda medida que tienda a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado, sea este material o inmaterial.

40 En esta línea, el caso Aloeboetoe y otros y el caso Velásquez Rodríguez (Corte IDH, 1990; 1993).

41 En 1948, la CIJ que reemplaza en sus funciones a la CPJI en la ONU emanó su primer pronunciamiento en el Caso Canal de Corfú. La CIJ entendió el concepto de reparación de acuerdo con las normas de *ius cogens* y manifestó que estas normas se identifican con los principios de humanidad y que cuando son vulneradas surge la obligación de reparar.

Como se aprecia, la perspectiva de la Corte se enfoca en la víctima del daño. En esta línea, la reparación por violación de derechos humanos apunta a dar cobertura al daño patrimonial y al daño extrapatrimonial, a cuyo fin se articula un conjunto de medidas de reparación, que además comprenden aquellas que se orientan a garantizar que los hechos violatorios no se repitan. Esta última manifestación de las medidas de reparación va más allá de la indemnización pecuniaria porque constituye una manera de reconocer que la violación de derechos humanos, como puede ser el caso de una desaparición forzada de personas, trasciende a la propia víctima, dado que afecta a la esencia del conjunto social al que pertenece<sup>42</sup>.

Acerca de la violación de derechos humanos, situación en la cual una vez producido el daño, difícilmente puede cumplirse con la aspiración del restablecimiento de las cosas al estado anterior al evento dañoso —lo que traduce el principio de la *restitutio in integrum*—, la jurisprudencia internacional ha resuelto en estos casos que la reparación tiene lugar mediante la indemnización pecuniaria<sup>43</sup>. Es evidente que la naturaleza fungible de este tipo de indemnización permite que se cumpla el principio de la reparación integral del daño y suele comprender la indemnización del daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

Resulta claro que las indemnizaciones forman parte del espectro de medidas que permiten cumplir de una u otra manera con el principio de reparación integral del daño. Sin embargo, también queda claro que no se trata de la única medida de la que dispone la CIDH para propender a la satisfacción de las necesidades y expectativas de las víctimas de violaciones de derechos humanos. La indemnización contempla la valoración económica del daño emergente, del lucro cesante, de los perjuicios morales y, en algunos casos, del daño al proyecto de vida<sup>44</sup>.

42 Precisamente, las exigencias de otras medidas de reparación, adicionales a la indemnización, como el reconocimiento público de responsabilidad internacional, un monumento o plaza como recordatorio de la memoria de las víctimas, fueron requeridas a la CIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la viuda de la víctima en un caso de desaparición forzada de Ángel Velásquez Rodríguez, en Honduras, donde la CIDH emitió sentencia el 21 de julio de 1989, donde dispuso la indemnización pecuniaria y el recordatorio al estado de Honduras de que debía cumplir con su deber de investigar y reparar, como una obligación ponderada en la sentencia de fondo y no como una medida de reparación autónoma.

43 En este sentido resolvió la Corte (2004c) el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú y el caso 19 Comerciantes vs. Colombia (2004b).

44 No es frecuente encontrar en la doctrina sobre el tratamiento de las reparaciones en el plano internacional una referencia explícita a que las indemnizaciones cubran también el daño al proyecto de vida. Sin embargo, dicha referencia se ha podido encontrar en Barbosa (2002).

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria•

Los rubros de daños que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce indemnizables son los siguientes: a) el daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia; b) la pérdida de oportunidades, incluidas las de educación; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) el daño a la reputación o a la dignidad y e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, psicológicos y sociales<sup>45</sup>. Como se podrá revisar más adelante, se trata de unas categorías de daños similares a las que contiene la Resolución 60/147 de 2005, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas, en materia de reparación a las víctimas de violación de derechos humanos.

Por otro lado, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte ha extendido las categorías de daños reparables a la figura del daño al proyecto de vida. Se trata de un concepto de daño que ha sido trabajado desde el Derecho Civil latinoamericano, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, como se explica en el último apartado del escrito. Este tipo novedoso de daño aparece conceptualizado en las sentencias de la CIDH, concretamente, en una serie de casos resueltos a finales de la década del noventa, mas no existe uniformidad en la manera de determinar la aplicación de las medidas de reparación específicas, circunstancia que devela las grandes dificultades de valoración que afronta esta especial categoría de daño.

A manera de síntesis, cabe destacar con Faúndez (2004) que la jurisprudencia de la CIDH alude a dos nociones distintas cuando se refiere a la reparación del daño<sup>46</sup>. De un lado, aduce la reparación del daño en toda su amplitud y, de otro,

45 El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Comisión de Derechos Humanos, 18 de enero de 2000).

46 En el Derecho Internacional Público (en adelante, DIP), el concepto de reparación de los daños es como en el Derecho Civil producto de una amplia y laboriosa evolución. A inicios del siglo XX, el vocablo "indemnización" era empleado indistintamente del de "reparación". Así, la referencia a la indemnización en el Artículo 3 de la Convención de la Haya relativa a las leyes y costumbres de la Guerra Terrestre, del 18 de octubre de 1907, se encuentra como un concepto amplio para las víctimas de violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Con posterioridad y siempre en el terreno del DIP, empieza a tener protagonismo la "reparación" como un concepto autónomo que se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo Artículo 8 contempla que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley", precepto que a su vez se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala: "Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación" (ONU, Asamblea General, 1966). Ulteriores instrumentos internacionales han contemplado la obligación de los Estados de incluir en sus legislaciones internas mecanismos de reparación justa y adecuada. En lo que respecta al específico campo del Derecho Internacional de Derechos Humanos, se consagra de manera general el deber que tienen los Estados de reparar las violaciones a

la indemnización. El internacionalista venezolano precisa que entre ambas existe una relación de género a especie. En efecto, el concepto de reparación intenta reflejar el principio de la *restitutio in integrum* que contiene el Artículo 63.1 de la Convención Americana, lo que alcanza a las medidas de satisfacción y de no repetición de los hechos. En cambio, el concepto de indemnización se limita a las consecuencias pecuniarias del hecho dañoso.

Para reforzar la reparación de las víctimas en el Derecho Internacional, surgió la necesidad de contar con una normativa internacional sobre la reparación de los daños. Fue así que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargó la realización de unos estudios entre los años 1993 y 1997 que tuvieron por objeto la revisión del concepto de reparación en relación con el tema de la impunidad<sup>47</sup>. Los referidos trabajos dieron lugar a la Resolución 60/147, promulgada por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005 (ONU, Asamblea General, 2005) mediante la cual se aprobó un documento que contenía los principios y las directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Esta norma, considerada de *Soft Law*, se refiere a las modalidades y los alcances de la obligación de reparar los daños que tienen los Estados, de acuerdo con el Derecho Internacional (Núñez y Zuluaga, 2012).

El primero de dichos estudios, se encargó en 1993 y correspondió al trabajo del relator especial Théo van Boven, bajo el título “Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Señala que cuando se aborda el tema de la impunidad, se alude inevitablemente al concepto de reparación equitativa y adecuada de las víctimas (Comisión Colombiana de Juristas, 2007).

La Resolución 60/147 es portadora del mensaje que fluye de los estudios que la generaron. En ese marco argumentativo, en los mencionados principios se

---

los derechos humanos. Se destacan la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

47 Los principios y las directrices que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas son el producto de dos estudios: el primero, de 1993, referido al concepto de reparación que fuera iniciado por el relator especial Théo van Boven y concluido por M. Cherif Bassiouni; el segundo, de 1997, relativo al tema de la impunidad, realizado por el relator especial Louis Joinet y actualizado por Diane Orentlicher (Comisión Colombiana de Juristas, 2007).

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria.

reconoce el derecho individual y colectivo a la reparación, entendido como una noción genérica que comprende distintas modalidades de reparación que no son excluyentes, sino complementarias. Las formas de reparación que contempla la Resolución de la ONU consisten en la restitución<sup>48</sup>, la indemnización<sup>49</sup> y la rehabilitación<sup>50</sup>, así como también las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las violaciones<sup>51</sup>.

En el texto de la Resolución se observa que solamente la medida que concierne a la indemnización (párr. 20) ha sido conectada con las diversas categorías de daños que allí se refieren, entre las cuales se enuncian el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, los perjuicios morales, los gastos de asistencia médica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

De igual modo, respecto a las demás medidas de reparación a que alude la Resolución (restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición), se puede entender que, al no estar vinculadas específicamente a una u

48 La restitución se define en la Resolución 60/147 como la medida orientada a restablecer la situación existente antes de la violación de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario. Se aplica, por ejemplo, en casos relacionados con el restablecimiento de la libertad, la vida familiar, la ciudadanía o nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior y la recuperación del empleo o de la propiedad.

49 La indemnización es definida en la Resolución 60/147 como la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación y que fuera evaluable económicamente. Se concede en casos de daño físico o mental, de pérdida de oportunidades —incluidas las de educación—, de daños materiales y pérdidas de ingresos —incluido el lucro cesante—, los perjuicios morales, así como para los gastos de asistencia jurídica o de otros expertos, de medicinas o de servicios médicos.

50 La rehabilitación es definida en la Resolución 60/147 como la medida que se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención médica y psicológica, así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines.

51 La Resolución 60/147 define las medidas de satisfacción y garantías de no repetición como aquellas que apuntan a una reparación simbólica y otras orientadas a la prevención de violaciones mediante la construcción de condiciones para evitar su repetición. En este bloque se pone de manifiesto, una vez más, la importancia de la verdad y la justicia como contenido de la reparación integral. En síntesis, se plantea el deber del Estado de adoptar medidas adecuadas para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones que vulneren su dignidad. Entre ellas figuran: las medidas de satisfacción (como la cesación de las violaciones, la verificación de los hechos y la publicación de la verdad; la declaración oficial o la decisión judicial de reparación de la dignidad, de la reputación y de otros derechos de las víctimas; la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades; las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas; la enseñanza y la difusión de la verdad histórica) y las medidas de prevención (incluyen la disolución de grupos armados no oficiales vinculados directa o indirectamente al Estado o de grupos paraestatales; las medidas administrativas o de otra índole relativas a los agentes de Estado implicados en violaciones graves de los derechos humanos).

otra categoría de daño, son aplicables de manera conjunta y complementaria a la medida indemnizatoria, con el objetivo de:

[...] dar a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva (ONU, Asamblea General, 2005).

La Resolución de la ONU contempla que la “indemnización” ha de concederse, de manera apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario.

De lo señalado se desprende que el criterio de equidad será una guía de magna importancia para los magistrados en la valoración de la gravedad de la violación del derecho y las circunstancias del caso a los fines de la indemnización.

En cuanto a la valoración del daño moral, la jurisprudencia de la CIDH ha afirmado que puede ser objeto de compensación material y su determinación se hará bajo las reglas de la equidad y del juicio<sup>52</sup>. La Corte considera daño moral aquel que proviene de los efectos psíquicos sufridos por la víctima como consecuencia de la violación de sus derechos e incluye sufrimiento, dolor y angustia que se le causaron a la víctima directa o a sus familiares, así como todo sufrimiento que no puede traducirse de manera contable (Corte IDH, 2001a). En esta línea, la Corte ha llegado a presumir la existencia del daño moral en los casos de graves violaciones de derechos humanos. Dicha presunción ha sido considerada en relación con los esposos, padres, hijos y hermanos de la víctima directa del ilícito<sup>53</sup>.

Acerca del daño patrimonial —sea el daño emergente, el lucro cesante o la pérdida de la oportunidad—, la Corte se refiere como daño pecuniario y comprende el daño emergente y lucro cesante, en la medida en que son cuantificables objetivamente en términos monetarios. La valoración resulta mucho más simple en comparación con el daño no patrimonial. Sin embargo, la jurisprudencia de la

52 Caso Castillo Páez vs. Perú, Serie C. 43, párr. 84 y ss.

53 En este sentido se pueden citar, entre otros, Corte IDH (1997a; 2001a; 2001b; 2002a).

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria•

Corte ha entendido que, en casos excepcionales, a falta de prueba directa del daño emergente, se puede resolver la compensación en virtud del principio de equidad (Corte IDH, 1996a; 1996b).

Tras identificar que la CIDH recurre a la equidad como principio de valoración del daño en diversos supuestos, llama la atención que, en cuanto al daño no patrimonial, la relación de perjuicios indemnizables incluida en la Resolución 60/147 solo contemple el daño moral como daño indemnizable, mas no así el “daño al proyecto de vida”. Esta circunstancia devela una cuestionable omisión respecto a uno de los más importantes reconocimientos que ha hecho la CIDH sobre el valor existencial que puede tener el programa de vida de una persona en el desarrollo integral de su personalidad.

Frente a tal omisión y en atención al desarrollo que ha tenido la figura del daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la CIDH, no cabe sino hacer énfasis en el carácter enunciativo de las categorías de daños contempladas en la Resolución. En este sentido, se puede inferir que los tribunales internacionales podrán seguir trabajando en la implementación del daño al proyecto de vida con el fin de su reparación como una categoría autónoma de daño derivado de la violación de derechos humanos y, por tanto, cobijado por el principio de la reparación integral. De la misma manera, podrán elegir las medidas de reparación que se ajusten a la gravedad de los casos.

## **La vigencia de la reparación integral por medio de la nueva categoría de daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la CIDH**

### *Noción del daño al proyecto de vida en las sentencias de la CIDH y medidas de reparación adoptadas*

La noción del daño al proyecto de vida aparece en la jurisprudencia de la CIDH como respuesta a la necesidad de reparar el truncamiento del proyecto personal y único del ser humano y que seguramente se ve afectado con la vulneración de los derechos fundamentales. Esta perspectiva de reconocimiento de una nueva figura de daño reparable ha comportado que la Corte extienda el abanico de los conceptos de daño indemnizable ya consolidados, como el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Desde esta óptica y bajo la inspiración del principio de la reparación integral del daño, ha surgido en el contexto del DIDH la categoría del

daño al proyecto de vida, más precisamente, con la sentencia de la CIDH recaída en el caso Loayza Tamayo (Corte IDH, 1997a). Con posterioridad, la Corte ha reiterado en sus fallos el reconocimiento de esta categoría autónoma de daño y susceptible de ser verificada<sup>54</sup>.

Conforme se desprende de la jurisprudencia de la Corte, el daño al proyecto de vida es una categoría de daño inmaterial que puede ubicarse junto al daño moral, pero difiere de este último. Asimismo, prevalece su autonomía respecto a los demás rubros de daño que ha reconocido la Corte. Sin embargo, se encuentra alguna sentencia en la que el daño al proyecto de vida ha sido asumido dentro del rubro del daño moral, como se verá más adelante. En esa virtud, se puede afirmar que la presencia de este nuevo tipo de daño para la jurisprudencia de la CIDH desvirtúa cualquier consideración que pretenda desconocer su existencia o en todo caso, su autonomía<sup>55</sup>, así como su naturaleza inmaterial<sup>56</sup>.

El caso Loayza Tamayo vs. Perú (Corte IDH, 1997a) puede configurarse como el seno que planteó por primera vez en la escena internacional de los derechos humanos una discusión en torno al daño al proyecto de vida. En ese contexto, la Corte abordó el tema de la configuración de este particular tipo de daño como una categoría que difiere del daño emergente y del lucro cesante, porque su esencia está lejos de constituir una afectación patrimonial derivada del hecho dañoso y porque tampoco consiste en la pérdida de una ganancia. La Corte señaló que esta figura de daño “atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas” (Corte IDH, 1997a, párr. 147).

Los hechos del caso consistieron en la detención ilegal de la profesora Loayza Tamayo, seguida de actos de tortura, durante su incomunicación y privación de la libertad. La Corte determinó la configuración del daño al proyecto de vida

54 Además del caso Loayza Tamayo vs. Perú (Corte IDH, 1997a), pueden verse Corte IDH (2001b; 2003a; 2003b; 2004d; 2004e).

55 El juez Oliver Jackman, en su voto razonado concurrente de la sentencia recaída en el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia (Corte IDH, 2005, párr. 4), manifestó sus reservas ante el concepto de daño al proyecto de vida. Afirmó que la consideración del daño al proyecto de vida “es artificial y una creación que no responde a una necesidad jurídica identificable”.

56 En el sentido de concluir que el daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la Corte se presenta como una categoría independiente del daño material e inmaterial (Galdámez, 2007).



y aunque consideró que se había producido, se abstuvo de cuantificarlo<sup>57</sup>. Por consiguiente, no hubo un reconocimiento económico por este concepto de daño. La Corte dispuso que el Estado adoptara medidas para reincorporar a la víctima al servicio docente al que pertenecía antes de la detención, asegurarle el derecho al goce de jubilación y adoptar medidas para evitar posibles efectos adversos de las resoluciones dictadas contra la víctima ante el fuero civil.

En el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala (Corte IDH, 2001a), conocido también como el caso Niños de la calle, se trató de la ejecución extrajudicial de un grupo de niños de la calle, en el cual, la Corte consideró la existencia de un daño al proyecto de vida, pero incluido en el daño moral, conforme a lo que plantearon los familiares de las víctimas.

En el caso Cantoral Benavides vs. Perú (Corte IDH, 2001b), se trató de la detención ilegal y tortura de Luis Alberto Cantoral. La Corte consideró probado que los hechos que afectaron a Luis Alberto Cantoral dañaron su proyecto de vida y, por tanto, para restablecerlo, ordenó que el Estado proporcionara a la víctima una “beca de estudios superiores o universitarios”. A diferencia del caso Loayza Tamayo, la Corte dispuso una medida de reparación por el daño al proyecto de vida, con lo cual ratificó su posición acerca de la referida categoría de daño y se pronunció por la reparación *in natura* del daño. Respecto a la sentencia de la Corte Suprema del Perú que condenó a Cantoral, dado que la normatividad aplicada era incompatible con la Convención, ordenó al Estado que la “deje sin efecto alguno” y anule antecedentes penales, administrativos, judiciales o policiales que existieran en su contra. Del mismo modo, la Corte ordenó una medida de satisfacción y garantía de no repetición, por medio de la publicidad de la sentencia y que el Estado publique la parte resolutive de la sentencia de fondo tanto en el *Diario Oficial* como en otro de circulación nacional.

En el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia (Corte IDH, 2005), se aprecia la reafirmación de la noción del daño al proyecto de vida. El Estado fue demandado por la detención arbitraria y torturas de Wilson Gutiérrez Soler, lo que le produjo graves daños físicos y perturbaciones psíquicas permanentes. La Comisión Interamericana alegó que el proyecto de vida de la víctima fue destruido a raíz de la impunidad y la falta de reparación del daño en las instancias nacionales. Los

57 En el caso Loayza Tamayo vs. Perú (Corte IDH, 1997a), solo el juez Roux Rengifo fue del parecer de que el daño al proyecto de vida debía ser cuantificado, concepto que no fue compartido por los demás magistrados.

representantes del demandante denunciaron que los hechos de los que fue víctima significaron un cambio radical de su vida cotidiana, provocaron la ruptura de su personalidad y la pérdida de los lazos familiares.

El juez Cançado Trindade, en su voto razonado, señala:

[...] después de los avances jurisprudenciales sobre el concepto del derecho al “proyecto de vida” [...] tenía la Corte la ocasión de avanzar en su construcción al respecto, pero la falta de consenso en el seno de la misma sobre qué rumbo tomar, imposibilitó un nuevo avance.

El juez consideró que en este caso, la Corte, debió haber dado un paso adelante en la construcción jurisprudencial de esta categoría de daño, sobre todo ante el reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado demandado y de haber pedido perdón a la víctima y sus familiares. Enseguida se refiere a la noción del proyecto de vida en los siguientes términos:

[...] el concepto de proyecto de vida tiene un valor esencialmente existencial, atendiéndose a la idea de la realización personal integral. Es decir, en el marco transitorio de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de la plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida devela, pues, un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno.

La conceptualización del proyecto de vida que se plasma en el mencionado voto razonado no hace sino confirmar la construcción iusfilosófica que propone el jurista Carlos Fernández Sessarego (2003a; 2003b; 2003c).

Frente a la decisión de la Corte, que dispuso la publicación parcial de la sentencia como medida de satisfacción adicional para reparar el daño al proyecto de vida y a la honra de la víctima y sus familiares, el juez Cançado Trindade consideró que dicha medida pudo haber sido seguida de la adopción de nuevas medidas que implicaran “un avance del concepto de derecho al proyecto de vida” y reconoció que ese daño coexiste con el daño moral.

Se puede observar que al disponer la publicación parcial de la Sentencia, expresa una posición sumamente tímida en relación con la forma de reparar el daño al proyecto de vida. Sin embargo, contrario al parecer del magistrado, quien señala que la Corte no dio un paso adelante en la construcción del concepto del daño al proyecto de vida, consideramos que la sentencia afianza el concepto ya acogido jurisprudencialmente por la Corte, aunque no postula nuevas y adecuadas

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria.

medidas reparadoras de esta particular categoría de daño a la persona. No se aprecia una indefinición en el *an* del daño; en cambio, el problema persiste en la determinación del *quantum* y por consiguiente, en la individualización de las medidas de reparación de este tipo de daño.

Cabe poner de relieve el llamado de atención que hace el juez Cançado Trindade en el voto de la referencia, cuando afirma que el Derecho no puede guardar silencio frente a una ruptura forzada por factores ajenos a la voluntad del individuo que destruyen su proyecto de vida de manera injusta y arbitraria. Por eso, invoca el Artículo 1 de la Convención Interamericana<sup>58</sup>, conforme al cual corresponde al Estado respetar y asegurar a todas las personas sujetas a su jurisdicción “la plena vigencia de los derechos protegidos, esencial para la realización del proyecto de vida de cada uno” (Corte IDH, 2005).

### **“Otras medidas de reparación” en la jurisprudencia de la CIDH**

Coherente con una perspectiva de protección de la víctima y de acuerdo con la laxitud de sus criterios en la interpretación de los instrumentos internacionales, la Corte ha tenido un rol activo en la adopción de medidas innovadoras para la reparación del daño, diferentes a la tradicional indemnización pecuniaria que aparece dispuesta en las primeras sentencias de la Corte sobre violación de derechos humanos.

Las “otras formas de reparación”<sup>59</sup>, como las denomina la propia Corte, comportan una obligación de hacer de los Estados, en observancia del principio de reparación integral del daño que, a su vez, constituye el imperativo contenido en el dictado del Artículo 63.1 de la Convención Americana.

58 El Artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé: “Los Estados parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Continúa: “Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

59 La denominación “otras medidas de reparación” se encuentra por primera vez en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador (Corte IDH, 1999).

En esta nueva e incesante tónica que adquiere la reparación de los daños por violación de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte, hacia mediados de la década del noventa, se encuentra una serie de medidas, entre las que cabe mencionar: disponer la plena vigencia del deber de investigar los hechos que motivaron el dictado de una sentencia (Corte IDH, 1997a), la reincorporación de la víctima al empleo del que fue arbitrariamente privado (Corte IDH, 2004e), el mandato de realización de un nuevo proceso judicial (Corte IDH, 2001b; 2006c), reformas legislativas, entrega de tierras tradicionales, capacitación a fuerzas de seguridad o personal del Estado, dejar sin efecto una sentencia, disponer la publicación de partes pertinentes de la sentencia y el acto público de responsabilidad internacional (Corte IDH, 2002a; 2002b), entre otras<sup>60</sup>.

Además, la Corte ha dictado medidas de concientización y memoria, cuyo objeto es la no repetición de los hechos, por el significado que tienen no solo para las víctimas directas e indirectas, sino para toda la sociedad<sup>61</sup>.

Las medidas de reparación que se mencionan en los párrafos anteriores se pueden agrupar en medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías de no repetición (Corte IDH, 2006b) y medidas de rehabilitación (Corte IDH, 2010). Todas ellas se diferencian de las medidas de indemnización o compensación en su contenido y apuntan a ofrecer una protección más amplia de los derechos de las víctimas, pues cuando no es posible la *restitutio in integrum* en los casos de violación de derechos humanos la CIDH ha venido contemplando mecanismos para tratar de garantizar el respeto de los derechos conculcados y de reparar las consecuencias derivadas de los actos ilícitos, incluida la aplicación de las correspondientes indemnizaciones.

En relación con las medidas de reparación dictadas en las sentencias de la CIDH, se ha observado que podrían encontrarse dificultades para su cumplimiento por parte de los Estados, debido a la escasa precisión referida a la forma de llevarse a cabo. De allí que sea recomendable delimitarlas (Rousset, 2001), sobre todo porque se trata de obligaciones a cargo del Estado, con lo cual se

60 Como ha destacado Rousset Siri (2001), el espectro de medidas de reparación continuará en permanente expansión, de acuerdo con las exigencias que planteen los casos concretos.

61 La jurisprudencia de la CIDH comprende, en un primer momento, todas estas formas de reparación bajo la denominación de “medidas de satisfacción y no repetición” (Corte IDH, 2004a); posteriormente, desde 2008, se refiere a ellas como “medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición”.

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria.

reduciría el margen de discrecionalidad para su aplicación y satisfacción de la víctima.

Al haber formulado dichas medidas en sentido amplio, puede constituir un factor que obstaculice la implementación por parte de los Estados. Por ejemplo, si la medida de satisfacción consiste en una beca de estudios para la víctima, debería disponer por cuánto tiempo se dará la beca, el ente que la ofrecerá en la práctica, si hay una cobertura total o integral de los estudios, etc.

### *El caso colombiano y las “otras medidas de reparación”*

En la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano existen dificultades para el cumplimiento de las medidas de reparación diferentes a la indemnización. Existen, pues, muy pocos casos en los que el Consejo de Estado ha aplicado las nuevas medidas de reparación integral establecidas por la CIDH. Por una parte, se ha hecho referencia a dichas medidas de reparación, pero sin llegar a ser aplicadas y, por otra, se han aplicado de manera muy limitada<sup>62</sup>. Son pocas las personas que se han visto beneficiadas de las nuevas medidas de reparación diferentes a la medida indemnizatoria, más aún si se tiene en cuenta la gran variedad de las mismas, como se desprende de la jurisprudencia de la Corte.

En esa línea de implementación de las directivas internacionales frente a las víctimas, el Estado colombiano dictó la Ley de Justicia y Paz, —Ley 975 de 2006— así como la Ley de víctimas y reparación de tierras —Ley 1448 de 2011—. En ambas se contemplan mecanismos de reparación inspirados en los lineamientos internacionales. Sin embargo, se han planteado cuestionamientos relativos a su eficacia, aunque contemplan varios tipos de reparación. En el

62 En una primera fase de implementación de las medidas de reparación integral, el Consejo de Estado de Colombia mencionó la existencia de dichas medidas, pero no las aplicó. En 2008, el Consejo de Estado aplicó solo algunas medidas como el ofrecimiento de disculpas públicas por medio de una ceremonia que debía presidir el director general de la Policía nacional y el alcalde de municipio, el diseño y la implementación de un sistema de promoción y de respeto de los derechos de las personas privadas de libertad y la publicación de la Sentencia en un espacio visible de las instalaciones del municipio. En 2011, se emitieron algunas sentencias del Consejo de Estado (2011a; 2011b) que han contemplado las medidas de reparación. Una de ellas dispuso que el Estado debía brindar a los demandantes las medidas encaminadas a procurar su readaptación, integración social y superación individual, consistente en tratamientos psiquiátricos, psicológicos y terapéuticos necesarios para superar los hechos. Asimismo, esta Sentencia ordenó el ofrecimiento de disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército nacional, en una ceremonia pública, por el acaecimiento de los hechos. En otra sentencia, el Consejo (2011) demandó “diseñar e implementar un sistema idóneo y eficiente de seguridad que, con garantía de los derechos fundamentales de los enfermos, impida que los pacientes psiquiátricos catalogados como peligrosos o riesgosos puedan evadirse o fugarse de las instalaciones del centro hospitalario” (Núñez y Zuluaga, 2012, pp. 223-224).

primer caso, la propia Corte ha considerado que se trata más bien de una ley de indulto, amnistía o impunidad en Masacre de la Rochela vs. Colombia (Corte IDH, 2007) y hasta se ha catalogado como una ley contraria a las obligaciones internacionales, por el endeble valor punitivo. En el segundo caso, se ha cuestionado que pese a que el Artículo 9 de la Ley 1448 establece las medidas de verdad, justicia y reparación, la Ley misma ha precisado que tales medidas no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado. La previsión normativa se impregna de impunidad, lo que podría configurar una violación de los estándares internacionales respecto a la verdad (Núñez y Zuluaga, 2012).

El Estado colombiano está obligado a reparar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos e implementar las medidas innovadoras que ha dispuesto la CIDH, así como a investigar, juzgar y sancionar a los culpables. Es reprobable que a la fecha Colombia haya sido sancionada en diez casos por incumplimiento a sus compromisos asumidos con la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos<sup>63</sup>; no obstante, la Ley 446 de 1998, en cuyo Artículo 16 expresa: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y cosas, atenderá a los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

### *Otras “medidas de reparación” frente al daño al proyecto de vida*

La naturaleza de daño inmaterial que tiene el daño al proyecto de vida genera grandes dificultades para que un tribunal, sea nacional o internacional, afronte la determinación de la reparación del daño. Tales inconvenientes de valoración del daño al proyecto de vida se ven reflejadas en las diversas sentencias de la Corte en las que, aunque reconoce la existencia de la categoría, la jurisprudencia expone lo complicado que ha sido para la Corte hacer frente a la evaluación final de este tipo de daño.

Los casos mencionados en párrafos anteriores, en los que la CIDH ha reconocido la existencia de un daño al proyecto de vida constituyen una prueba del carácter innovador de la Corte, al disponer nuevas medidas de reparación que

63 La relación de casos en los que Colombia es sancionada por incumplimiento a sus obligaciones internacionales se reportan en Navarrete (2009).

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria•

difieren de las medidas indemnizatorias tradicionales (García, 2005). En parte, esto refleja también las dificultades con las cuales se ha encontrado el Tribunal para reconocer una indemnización pecuniaria en esos casos.

Por otra parte, es lamentable encontrar en la jurisprudencia de la CIDH que no existe una posición clara y definida ante la concesión de indemnizaciones del daño al proyecto de vida, toda vez que lo que se desprende hasta el momento es solo una posición indemnizatoria del daño moral, figura de daño totalmente distinta y más bien limitada frente al daño al proyecto de vida.

Se puede inferir que el trabajo de la CIDH en cuanto a la reparación del daño al proyecto de vida se encuentra en evolución y ha sentado las bases teóricas en la configuración de un daño al proyecto de vida como consecuencia de la violación de derechos humanos. Sin embargo, el camino para reconocer la viabilidad de la indemnización pecuniaria de este daño todavía es largo.

En esa línea de trabajo conducente a la consolidación de esta trascendente categoría de daño no patrimonial, pueden ser valiosos los logros alcanzados en el Derecho interno de los Estados latinoamericanos, en especial, aquellos que no solo han acogido en el espectro de daños indemnizables al daño al proyecto de vida, sino que han dispuesto su indemnización pecuniaria como una categoría de daño a la persona, vale decir, como daño no patrimonial, independiente del daño moral.

Desde esas consideraciones, es criticable incurrir o persistir en una confusión entre el daño al proyecto de vida y el daño moral, aunque con el primero solo comparte la naturaleza extrapatrimonial, mas no la esencia sobre la que se erige el daño al proyecto de vida.

## La doctrina latinoamericana sobre el daño al proyecto de vida

### *El principio de la reparación integral*

La reparación integral como principio configura una importante directriz para el juzgador<sup>64</sup> y, al mismo tiempo, constituye una norma basilar de la institución de la responsabilidad civil.

64 Entre los significados que los autores proponen para el vocablo "principio", se destacan los que se refieren a él como norma dirigida a los órganos jurídicos y señalan la forma de aplicación e interpretación, como norma de gran generalidad que permite la sistematización del ordenamiento jurídico o como norma de especial importancia cuyo grado de generalidad es bajo (Atienza y Ruiz, 1991).

En esa línea, la reparación integral del daño no puede tener dos significados en el ordenamiento jurídico, uno como simple pauta o referencia para el caso de la Ley de Víctimas y otro de carácter obligatorio para el juez en la responsabilidad civil, en el que se erige como norma rectora de la institución “la directive essentielle en ce qui concerne l’évaluation des indemnités” (Viney y Jourdain, 2001, p. 112). De lo contrario, se estaría creando inseguridad en las víctimas de los daños, quienes ante un proceso judicial, en el que la ley no haya establecido límites resarcitorios, queda en pie la observancia del principio de reparación integral en toda su extensión.

En ese sentido, la reparación integral en cuanto principio significa partir de la necesidad de la indemnidad total, la cual, en circunstancias especiales o indemnizables, lleva a considerar las posibilidades fácticas jurídicas<sup>65</sup>.

### *El daño no patrimonial y las dificultades en la aplicación del principio de reparación integral*

La indemnización del daño no patrimonial es resultado de un proceso de evolución de la institución de la responsabilidad civil, el cual se caracteriza por dejar atrás la mirada en el agente del daño para determinarse la responsabilidad y, más bien, ha fijado la atención en la situación en la que se encuentra la víctima del daño, a los fines de determinar su indemnización.

Cuando se trata de reparar el daño no patrimonial, no existe una compensación del mismo, puesto que es imposible contar con parámetros objetivos para su valoración. No se puede hablar en ese caso de un equilibrio entre la indemnización y el daño efectivamente sufrido por la víctima. Es evidente que se excluye, por inaplicable, lo que podría denominarse un modelo matemático o de ecuación (De Ángel, 1995) y nunca habría una plena reparación del daño; sin embargo, es en este punto que surge el problema de la reparación del daño no patrimonial, lo que no significa negar su indemnización por las dificultades que existen para determinarla.

Si bien la responsabilidad civil contemporánea tiene la mirada puesta en la víctima del daño para articular la indemnización, en el terreno del daño no patrimonial se puede apreciar una cierta tendencia de los jueces a referirse en la

65 La reparación integral, en cuanto principio, significa partir de la necesidad de la indemnidad total que, en circunstancias especiales o indemnizables, lleva a considerar las posibilidades fácticas jurídicas (Sandoval, 2013).



valoración del daño “a la muy descuidada conducta del agente o a su temerario proceder” (De Ángel, 1995, p. 61). Esto puede ocurrir porque el juez tendrá que valorar el daño de acuerdo con el criterio de equidad, en vista de que no existe parámetro objetivo de referencia para fijar la indemnización.

El recurso al criterio de la equidad no debe comportar un espíritu de sanción al agente del daño por la gravedad de su conducta, pues no se trata de volver atrás y postular una función punitiva de la responsabilidad característica de otros tiempos, cuando la esfera de acción de la institución era tremendamente limitada (Koteich, 2011).

### *El daño al proyecto de vida*

El daño al proyecto de vida es una construcción teórico-iusfilosófica que se ubica en la más amplia categoría del daño a la persona y parte de la consideración del ser humano como una estructura existencial, es decir, una unidad psicosomática constituida y sustentada en la libertad. Desde esta perspectiva, el daño a la persona puede manifestarse como una lesión de la integridad física del ser humano y como una afectación psíquica. En el primer caso, adquiere relevancia el daño físico o material y en el segundo, el daño psíquico. Además, el daño a la persona puede manifestarse como una afectación de la libertad fenoménica y es entonces cuando se configura el daño al proyecto de vida (Fernández Sessarego, 2002d).

El reconocimiento de una especial categoría de daño a la persona, como es el daño al proyecto de vida, es atribuido al maestro Carlos Fernández Sessarego, quien a lo largo de su trayectoria profesional se ha preocupado por la protección del ser humano con un enfoque civilista y constitucional; así, entre sus aportes al Derecho, de impronta humanista y solidaria, se encuentra el daño al proyecto de vida.

¿Qué es el daño al proyecto de vida? La respuesta emociona desde la expresión que la contiene. Enseña Fernández Sessarego (2002d) que se trata del “daño que afecta el propio ser de la persona, es decir, la libertad” (p. 550). La libertad a la cual se refiere el jurista al configurarse esta especial categoría de daño es a la libertad en cuanto ser; no es la libertad ontológicamente considerada, que no se pierde sino cuando se muere, sino a la expresión o manifestación de la libertad.

Se trata, en su origen, de decisiones libres que se concretan en la realidad del diario vivir, por obra tanto de las potencialidades y energías de la persona como por la contribución de los “otros”, de actos y conductas intersubjetivas, todas ellas encaminadas a la realización de un cierto personal “proyecto de vida” (p. 551).

De allí que se pueda causar graves lesiones a la referida libertad fenoménica, o sea, al proyecto de vida. La afectación puede variar entre el retardo o menoscabo del proyecto de vida hasta su frustración total, lo que podría desencadenar, como apunta el jurista peruano, en la pérdida del sentido de la vida.

Como resalta Fernández Sessarego (2003b), si bien el proyecto de vida es singular y personal, puede resultar complejo y abarcar más de un propósito. En este sentido, se puede pensar que un mismo proyecto de vida comprenda el aspecto profesional y el aspecto familiar.

La afectación del proyecto de vida puede ocasionar graves consecuencias de índole no patrimonial y patrimonial, todas derivadas de la lesión a la libertad fenoménica. Fernández Sessarego hace énfasis en el aspecto indemnizatorio del daño al proyecto de vida como un daño no patrimonial (Fernández Sessarego, 2003b). En efecto, junto con las consecuencias patrimoniales de una lesión a la persona, en atención al principio de reparación integral, también deberán considerarse las de carácter no patrimonial, entre las cuales se cuenta esta particular categoría de daño y hasta el daño moral.

Su diferencia con el daño moral es notable, pues este último se reduce al mero sufrimiento, a la dolencia, angustia o perturbación psíquica transitoria que resulta del agravio a los principios, creencias, sentimientos o intereses de la persona<sup>66</sup>. Al respecto se pronunció una sentencia de Casación peruana (Corte Suprema de Justicia, 2007):

El daño moral es uno de los múltiples daños sicosomáticos que pueden lesionar a la persona por lo que se le debe considerar como un daño que afecta la esfera sentimental del sujeto, resultando así una modalidad síquica del genérico daño a la persona. En tanto que el daño al proyecto de vida, incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia libre decisión, siendo un daño radical, continuado, que acompaña al sujeto durante toda su vida en la medida que compromete, para siempre, su “*manera de ser*”. El llamado daño moral, no compromete la libertad del sujeto, pues, como

66 Sobre la noción de “daño moral”, Fernández Sessarego (2003b) cuestiona la figura como categoría autónoma de daño y más bien la considera dentro del daño a la persona, como una lesión a uno de los aspectos psíquicos, no patológicos, de carácter emocional.

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria•

se ha anotado es un daño sicosomático que afecta la esfera sentimental del sujeto en cuanto su expresión es el dolor, el sufrimiento, siendo un daño que no se proyecta al futuro, pues no está vigente durante la vida de la persona, tendiendo a disiparse, generalmente, con el transcurso del tiempo.

Asimismo, se diferencia del daño existencial. Esta figura surge de la doctrina italiana hacia los años noventa del siglo XX en el seno de la Escuela de Trieste. Consiste en un daño efectivo y real que afecta el diario transcurrir de la persona, su realización personal, en cuanto a los actos o acontecimientos propios del diario existir. Lesiona uno o más proyectos cotidianos y que conducen, como destaca Fernández Sessarego (2003b), de una manera consciente o inconsciente, directa o indirecta, al desarrollo del singular proyecto de vida de un sujeto. En relación con el daño al proyecto de vida, ambos se refieren a la realización de la persona, pero el autor precisa que aluden a ella en dos grados diferentes, pues en el caso del daño al proyecto de vida no solo se afecta el bienestar de la persona sino el sentido mismo de su existencia (Bilotta, 2006; Cendon, 1998; Fernández Sessarego, 2003b; Ziviz, 1994).

Acerca de los daños patrimoniales, el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de oportunidad, es indiscutible la distancia que marca el daño al proyecto de vida, si se atiende a la propia conceptualización que se subraya en los párrafos que preceden.

No obstante las diferencias existentes con las otras categorías de daño, puede suceder que la jurisprudencia, sea de Derecho interno o internacional, se refiera al daño existencial, cuando en realidad se desprenda la vulneración del proyecto de vida. De allí la relevancia que tiene una noción clara de esta particular e importante categoría.

No es esta la sede de un dedicado y extenso estudio sobre el daño al proyecto de vida, mas sí es la ocasión para hacer una remisión a los extremos más representativos de la doctrina sobre el tema, la cual es rica y contundente al sostener la indemnización de esta categoría. En el presente escrito solo se trata de destacar la necesidad de comprender la esencia del daño al proyecto de vida como daño resarcible. Para ello, se remite a los importantes trabajos que han abordado la problemática de su existencia y consiguiente indemnización<sup>67</sup>, no sin exaltar su

67 A continuación referimos a manera de ilustración algunos de los trabajos que sobre el daño al proyecto de vida ha publicado el maestro Carlos Fernández Sessarego (1995; 1996; 2002a; 2002b; 2002c).

trascendencia legislativa, de lo cual es una evidencia el reciente Código Civil argentino de 2014, en cuyo Artículo 1738 se ha contemplado la lesión al proyecto de vida como una categoría de daño resarcible.

En efecto, la doctrina y jurisprudencia argentinas proyectan y desarrollan el pensamiento de Fernández Sessarego en cuanto a la construcción del daño al proyecto de vida como una categoría especial del daño a la persona, lo que despierta el interés de los juristas siempre dispuestos al análisis de los nuevos planteamientos orientados a priorizar la protección de esta.

Puede citarse una interesante ponencia de Osvaldo Burgos (2005), quien abordó el tema del daño extrapatrimonial en Argentina. Examinó el aporte que representa el daño al proyecto de vida en el campo de la reparación integral del daño y estableció su diferencia respecto al daño existencial y al daño moral. En línea con el pensamiento de Fernández Sessarego (1995; 1996; 2002a; 2002b; 2002c), parafrasea una serie de pasajes, entre los cuales destaca aquel que le pareció importante para su análisis. El ponente argentino destacó dos ideas fundamentales: la primera sostiene que “la libertad del hombre se manifiesta en su poder de ‘proyectarse’ un futuro personal y elegirlo entre varias opciones probables” (p. 398) y la segunda, que “la libertad resarcible ante la eventualidad de resultar dañada sería, entonces, la libertad que el hombre tiene de decidir, por sí, su vida” (p. 400). Enseguida, hace énfasis en la idea central de esta categoría de daño, según la cual el ser humano es tiempo (Heidegger, 1951). “Temporalmente fugaz, el hombre —ontológicamente libre— [...] dispone de toda su libertad para usarla durante un tiempo limitado” (Burgos, 2005, p. 400). De ese planteamiento, deduce Burgos (2005):

[...] la pérdida del tiempo propio por imposición de las consecuencias de un hecho ajeno, importaría una lesión gravísima, una afectación irreparable, un daño de extraordinaria magnitud ocasionado directamente al sujeto que lo padece [...] el tiempo futuro del hombre dañado ya no es libre (p. 400).

Según Burgos, el daño al proyecto de vida se revela como una tensión presente entre el pasado y la resignación de un futuro esperable y legítimo.

Lo que destaca en la ponencia del jurista argentino es el énfasis en la necesidad de la “indemnización” del daño al proyecto de vida y se afirma que “la distancia disvaliosa que, por razón del daño se le ha infringido, separa al hombre

•El daño al proyecto de vida: una categoría autónoma y necesaria•

de este futuro —razonable y no meramente hipotético— habrá de cuantificarse desde la óptica de un pasado demostrable” (Burgos, 2005, p. 401).

El planteamiento sobre la indemnización del daño al proyecto de vida se ve reforzado por el razonamiento de otra insigne jurista argentina, Matilde Zavala de González (2005), quien refiere:

Aquellos proyectos no descansan en meras aspiraciones investidas de alguna posibilidad, hasta el punto de que, casi siempre, ya se estaban gestando y desenvolviendo en discurrir del afectado, sobre una base objetiva y, además, con afianzadas perspectivas de continuidad [...]. No se han perdido entonces exclusivas oportunidades, sino tangibles realidades valiosas, muchas veces ya arraigadas en el individuo y con visos de perdurabilidad [...]. Un auténtico plan de vida no coincide por lo general con algo ceñido y puntual (como la imposibilidad de acceder a una beca, de conseguir un trabajo, de presentarse en un concurso científico) [...] sino que compromete el destino mismo del sujeto y, por eso, adquiere un perfil definitorio del ser existencial (p. 1).

Ana Salado Osuna (2004), profesora de la Universidad de Sevilla, analiza el origen y desarrollo del daño al proyecto de vida y cómo llega a ser acogido por la CIDH por vez primera en el caso *Loayza Tamayo vs. Perú* (Corte IDH, 1997a). Expresa que, en principio, su reparación no tiene que conllevar una cuantificación económica por parte de la Corte, sino que esta puede ordenar determinadas medidas, por ejemplo, que el Estado le proporcione una vivienda a la víctima:

[...] si a consecuencia de haberse frustrado sus expectativas de futuro, el objetivo de tener una vivienda no lo hubiera podido conseguir o se presente difícil su consecución. Pero lo anterior no significa que la Corte no deba cuantificar el “daño al proyecto de vida”, debería hacerlo cuando no encuentre una medida oportuna que ordenar al Estado repararlo (p. 74).

La autora española subraya que del mismo modo como se cuantifican los “daños morales” se puede cuantificar el “daño al proyecto de vida”, sin que ello signifique propugnar por una concepción economicista o patrimonialista del daño.

Es posible que el daño moral, pese a su naturaleza extrapatrimonial, sea objeto de indemnización no solo porque la CIDH así lo ha considerado, sino porque el Derecho Civil moderno lo contempla como una categoría para dar cumplimiento al principio de la reparación integral del daño, cuyo *quantum* es determinado por equidad. Entonces, no se explica la razón por la que haya que negar una

indemnización por concepto del daño al proyecto de vida<sup>68</sup>, más aún cuando este no representa el dolor pasajero de la víctima, sino el quiebre o atentado a su libertad fenoménica, a su programa o proyecto de vida. Es evidente que tendrá una repercusión económica en la vida misma que continúe la víctima, quien tendrá que darle un giro a su vida o tratar de encontrarle un sentido, lo que no siempre dependerá de sus propias fortalezas, sino de su entorno.

En fin, para una reconstrucción de la vida luego de haber padecido la violación de derechos fundamentales, el camino será difícil. He allí una razón de fuerza para apostar por toda medida de reparación necesaria con el fin de ayudar a la víctima a proseguir su proyecto de vida o emprender uno nuevo.

Para completar esta brevísima remisión a los avances del Derecho latinoamericano en torno al proyecto de vida, no puede pasar desapercibida la precisión que hizo el doctor Oscar Fappiano, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien pone de manifiesto que, como delegado de la Comisión Interamericana en el caso Loayza Tamayo, tuvo la responsabilidad de plantear, junto con la representante de la víctima, la cuestión atinente a la reparación del daño al proyecto de vida. Fue importante que se reconociera que se trataba por primera vez sobre la determinación de esta categoría de daño y, sobre todo, que para la fundamentación se tuvieron a la mano algunos trabajos del maestro Carlos Fernández Sessarego, a quien reconoce como su principal mentor (Salado, 2004).

Es indiscutible que los aportes de la doctrina y la jurisprudencia latinoamericanas pueden seguir siendo elementos de juicio valiosos en la reconstrucción y revaloración del daño al proyecto de vida en sede de la jurisprudencia de la CIDH, con el fin de promover la reparación de las víctimas de derechos humanos. Esta categoría especial de daño a la persona no hace sino llamar la atención sobre un blanco sensible de la afectación resultante de la vulneración de los derechos humanos, como es el proyecto de vida de una persona.

68 Algunos casos en los que se ha previsto la indemnización del daño al proyecto de vida en el plano del Derecho interno son los siguientes: Corte Suprema de Justicia del Perú (2006); Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (1992), en la que se habla del "desarrollo pleno de la vida"; Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (1995), que habla de la frustración del proyecto de vida de la víctima.

## Conclusiones

La CIDH reconoce el daño al proyecto de vida como una categoría autónoma de daño inmaterial. Así ha quedado evidenciado en la casuística jurisprudencial que, inspirada en una interpretación evolutiva y progresiva, es coherente con los principios que guían el DIDH y permite que sea un derecho vivo y dispuesto a incorporar ulteriores avances jurisprudenciales orientados a la reivindicación de las necesidades y aspiraciones de las víctimas.

Cabe destacar que el desarrollo jurisprudencial de la CIDH mediante los principios y conceptos que viene planteando, cumple un rol trascendental en la adecuación que deben implementar los Estados en sus Derechos internos, en los diversos niveles y aspectos de cada ordenamiento interno, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. De ese modo, se facilita que las víctimas de violaciones de derechos humanos recuperen la dignidad que fue atropellada por actos de violencia. En este sentido, el aporte de la jurisprudencia de la CIDH en la conceptualización de la víctima, en la configuración de los daños y en las medidas de reparación debe ser canalizado en los Derechos internos.

Es notorio que la determinación de la responsabilidad de un Estado por violación de derechos humanos no tendría sentido sin una plena y efectiva reparación de los daños, tendiente a la recuperación de la víctima y a abrirle posibilidades de retomar las riendas de su destino y de su valioso proyecto de vida. Es claro el mensaje que transmiten los principios y las directrices para la reparación de las víctimas que aprobó la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2005, donde se establece que la ausencia de reparación forma parte de la impunidad y que es obligación del Estado proveer a una justa reparación.

En efecto, el principio de reparación integral supone no dejar espacios concernientes al desarrollo de la personalidad —que se ve afectado por los atentados a los derechos humanos— sin una plena y efectiva reparación del daño. En este sentido se ha venido pronunciando la jurisprudencia de la CIDH. Sin embargo, como se ha podido apreciar, la Corte aún tiene un camino por completar, en particular en cuanto a la implementación de las medidas indemnizatorias. Para el caso específico de esta especial figura de daño, tales medidas están ausentes en sus pronunciamientos.

A diferencia de cuanto la CIDH ha resuelto sobre la indemnización del daño moral de las víctimas, no ha dispuesto una adecuada indemnización por concepto del daño al proyecto de vida. Al respecto, la Corte solo ha señalado algunas medidas reparadoras en la modalidad de satisfacción, es decir, en reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Esta actitud de la Corte frente a una novedosa categoría de daño a la persona delata una exigua comprensión de la realidad de la lesión que comporta el daño al proyecto de vida.

No se ha dispuesto la indemnización del daño al proyecto de vida por medio de una suma pecuniaria que posibilitara a la víctima aplicarla de la manera que, a su criterio, pueda mitigar los efectos que genera el quiebre de su proyecto existencial y quizás poder tener los medios necesarios para emprender un nuevo proyecto de vida. No se trata de indemnizar el sufrimiento como en el daño moral, de naturaleza transitoria, sino de indemnizar las consecuencias que tiene para la víctima el atentado a su proyecto existencial.

Es indudable que con la indemnización no se busca reducir a una suma de dinero el daño al proyecto de vida y las lesiones que derivan de la gravedad que representa la violación de los derechos humanos, pues como enseñan la doctrina y la jurisprudencia latinoamericanas, la indemnización en este caso, no cumple una función compensatoria del daño, sino una función satisfactoria para la víctima. Ello le permitirá mejorar la situación en la que se encuentra o recibir los estímulos necesarios para encaminar nuevamente su existencia.